LA PROBLEMÁTICA DE LA BASURA EN MÉXICO

Dra. Thalía Denton Navarrete
Profesora-Investigadora del Departamento de Derecho de la Universidad
Autónoma Metropolitana

A pesar de la legislación en materia de residuos sólidos y tóxicos, lamentamos que el manejo de ésta sea tan ineficiente. El daño al ambiente que provoca es alarmante y las autoridades en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, no cumplen sus funciones o simplemente niegan la realidad a pesar de las denuncias recibidas. La casuística nos muestra que siguen operando tiraderos a cielo abierto, que los confinamientos se instalan en lugares que no cumplen las medidas preventivas establecidas y se insiste en su operación no obstante las protestas ciudadanas que hasta son reprimidas con la fuerza pública.

Previo al análisis de esta problemática se hace necesario mencionar cuales son las funciones que la ley establece a cargo de las autoridades ambientales.

LA LEGISLACIÓN APLICABLE

Conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las funciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentran establecidas en el artículo 32 Bis y son, entre otras, el despacho de los siguientes asuntos:

Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos.

Por su parte la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente conceptualiza lo que debemos entender por materiales y residuos peligrosos; así en el artículo 3°. Se dice:

Residuo: "Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó";

Residuos peligrosos: "Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente";

Material peligroso: "Elementos, sustancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas";

En el artículo 11 de esta ley, se establece que la Federación, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la participación, en su caso, de sus Municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial:

El control de los residuos peligrosos considerados de baja peligrosidad conforme a las disposiciones del presente ordenamiento.

Por su parte el artículo 28 señala que la evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:

Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radiactivos;

En el Capítulo IV, el artículo 134 con referencia a la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán los siguientes criterios:

I. Corresponde al estado y la sociedad prevenir la contaminación del suelo;

II. Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la principal fuente de contaminación de los suelos;

III. Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, municipales e industriales; incorporar técnicas y procedimientos para su reuso y reciclaje, así como regular su manejo y disposición final eficientes;

IV. La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, debe ser compatible con el equilibrio de los ecosistemas y considerar sus efectos sobre la salud humana a fin de prevenir los daños que pudieran ocasionar, y

V. En los suelos contaminados por la presencia de materiales o residuos peligrosos, deberán llevarse a cabo las acciones necesarias para recuperar o restablecer sus condiciones, de tal manera que puedan ser utilizados en cualquier tipo de actividad prevista por el programa de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que resulte aplicable.

En el artículo 135 se establecen los criterios que se consideran para prevenir y controlar la contaminación del suelo:

I. La ordenación y regulación del desarrollo urbano;

II. La operación de los sistemas de limpia y de disposición final de residuos municipales en rellenos sanitarios;

III. La generación, manejo y disposición final de residuos sólidos, industriales y peligrosos, así como en las autorizaciones y permisos que al efecto se otorguen;

IV. El otorgamiento de todo tipo de autorizaciones para la fabricación, importación, utilización y en general la realización de actividades relacionadas con plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas.

El artículo 136 prescribe que los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se depositen o infiltren en los suelos deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir o evitar:

I. La contaminación del suelo;

II. Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos;

III. Las alteraciones en el suelo que perjudiquen su aprovechamiento, uso o explotación, y

IV. Riesgos y problemas de salud.

En el artículo 137 se dice: queda sujeto a la autorización de los Municipios o del Distrito Federal, conforme a sus leyes locales en la materia y a las normas oficiales mexicanas que resulten aplicables, el funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales.

La Secretaría expedirá las normas a que deberán sujetarse los sitios, el diseño, la construcción y la operación de las instalaciones destinadas a la disposición final de residuos sólidos municipales.

Artículo 138.- La Secretaría promoverá la celebración de acuerdos de coordinación y asesoría con los gobiernos estatales y municipales para:

I. La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales; y

II. La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de residuos sólidos municipales, incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus fuentes generadoras.

Artículo 139.- Toda descarga, depósito o infiltración de sustancias o materiales contaminantes en los suelos se sujetará a lo que disponga esta Ley, la Ley de Aguas Nacionales, sus disposiciones reglamentarias y las normas oficiales mexicanas que para tal efecto expida la Secretaría.

Artículo 140.- La generación, manejo y disposición final de los residuos de lenta degradación deberá sujetarse a lo que se establezca en las normas oficiales mexicanas que al respecto expida la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Artículo 141.- La Secretaría, en coordinación con las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial y de Salud, expedirán normas oficiales mexicanas para la fabricación y utilización de empaques y envases para todo tipo de productos, cuyos materiales permitan reducir la generación de residuos sólidos.

Asimismo, dichas Dependencias promoverán ante los organismos nacionales de normalización respectivos, la emisión de normas mexicanas en las materias a las que se refiere este precepto.

Artículo 142.- En ningún caso podrá autorizarse la importación de residuos para su derrame, depósito, confinamiento, almacenamiento, incineración o cualquier tratamiento para su destrucción o disposición final en el territorio nacional o en las zonas en las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Las autorizaciones para el tránsito por el territorio nacional de residuos no peligrosos con destino a otra Nación, sólo podrán otorgarse cuando exista previo consentimiento de ésta.

Artículo 143.- Los plaguicidas, fertilizantes y demás materiales peligrosos, quedarán sujetos a las normas oficiales mexicanas que expidan en el ámbito de sus respectivas competencias, la Secretaría y las Secretarías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de Salud y de Comercio y Fomento Industrial. El Reglamento de esta Ley establecerá la regulación, que dentro del mismo marco de coordinación deba observarse en actividades relacionadas con dichos materiales, incluyendo la disposición final de sus residuos, empaques y envases vacíos, medidas para evitar efectos adversos en los ecosistemas y los procedimientos para el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes.

Artículo 144.- Atendiendo a lo dispuesto por la presente Ley, la Ley Federal de Sanidad Vegetal y las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, la Secretaría coordinadamente con las Secretarías de Salud, de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Comercio y Fomento Industrial, participará en la determinación de restricciones arancelarias y no arancelarias relativas a la importación y exportación de materiales peligrosos.

No podrán otorgarse autorizaciones para la importación de plaguicidas, fertilizantes y demás materiales peligrosos,

cuando su uso no esté permitido en el país en el que se hayan elaborado o fabricado.

En el Capítulo V relativo a actividades consideradas como altamente riesgosas se determina en el artículo 145 que la Secretaría promoverá que en la determinación de los usos del suelo se especifiquen las zonas en las que se permita el establecimiento de industrias, comercios o servicios considerados riesgosos por la gravedad de los efectos que puedan generar en los ecosistemas o en el ambiente tomándose en consideración:

- I. Las condiciones topográficas, meteorológicas, climatológicas, geológicas y sísmicas de las zonas;
- II. Su proximidad a centros de población, previendo las tendencias de expansión del respectivo asentamiento y la creación de nuevos asentamientos;
- III. Los impactos que tendría un posible evento extraordinario de la industria, comercio o servicio de que se trate, sobre los centros de población y sobre los recursos naturales;
- IV. La compatibilidad con otras actividades de las zonas;
- V. La infraestructura existente y necesaria para la atención de emergencias ecológicas; y
- VI. La infraestructura para la dotación de servicios básicos.

Artículo 146.- La Secretaría, previa opinión de las Secretarías de Energía, de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, conforme al Reglamento que para tal efecto se expida, establecerá la clasificación de las actividades que deban considerarse altamente riesgosas en virtud de las características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas para el equilibrio ecológico o el ambiente, de los materiales que se generen o manejen en los establecimientos industriales, comerciales o de servicios, considerando, además, los volúmenes de manejo y la ubicación del establecimiento.

Artículo 147.- La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios altamente riesgosas, se llevarán a

cabo con apego a lo dispuesto por esta Ley, las disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el artículo anterior.

Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del Reglamento correspondiente, deberán formular y presentar a la Secretaría un estudio de riesgo ambiental, así como someter a la aprobación de dicha dependencia y de las Secretarías de Gobernación, de Energía, de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, los programas para la prevención de accidentes en la realización de tales actividades, que puedan causar graves desequilibrios ecológicos.

Artículo 147 BIS.- Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del Reglamento correspondiente, deberán contar con un seguro de riesgo ambiental. Para tal fin, la Secretaría con aprobación de las Secretarías de Gobernación, de Energía, de Economía, de Salud, y del Trabajo y Previsión Social integrará un Sistema Nacional de Seguros de Riesgo Ambiental.

Artículo 148.- Cuando para garantizar la seguridad de los vecinos de una industria que lleve a cabo actividades altamente riesgosas, sea necesario establecer una zona intermedia de salvaguarda, el Gobierno Federal podrá, mediante declaratoria, establecer restricciones a los usos urbanos que pudieran ocasionar riesgos para la población. La Secretaría promoverá, ante las autoridades locales competentes, que los planes o programas de desarrollo urbano establezcan que en dichas zonas no se permitirán los usos habitacionales, comerciales u otros que pongan en riesgo a la población.

Artículo 149.- Los Estados y el Distrito Federal regularán la realización de actividades que no sean consideradas altamente riesgosas, cuando éstas afecten el equilibrio de los ecosistemas o el ambiente dentro de la circunscripción territorial correspondiente, de conformidad con las normas oficiales mexicanas que resulten aplicables.

La legislación local definirá las bases a fin de que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, coordinen sus acciones respecto de las actividades a que se refiere este precepto.

En el Capítulo VI correspondiente a Materiales y Residuos Peligrosos, el artículo 150 precisa que los materiales y residuos peligrosos deberán ser manejados con arreglo a la presente Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría, previa opinión de las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Gobernación. La regulación del manejo de esos materiales y residuos incluirá según corresponda, su uso, recolección, almacenamiento, transporte, reuso, reciclaje, tratamiento y disposición final.

El Reglamento y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el párrafo anterior, contendrán los criterios y listados que identifiquen y clasifiquen los materiales y residuos peligrosos por su grado de peligrosidad, considerando sus características y volúmenes; además, habrán de diferenciar aquellos de alta y baja peligrosidad. Corresponde a la Secretaría la regulación y el control de los materiales y residuos peligrosos.

Asimismo, la Secretaría en coordinación con las dependencias a que se refiere el presente artículo, expedirá las normas oficiales mexicanas en las que se establecerán los requisitos para el etiquetado y envasado de materiales y residuos peligrosos, así como para la evaluación de riesgo e información sobre contingencias y accidentes que pudieran generarse por su manejo, particularmente tratándose de sustancias químicas.

Artículo 151.- La responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos peligrosos corresponde a quien los genera. En el caso de que se contrate los servicios de manejo y disposición final de los residuos peligrosos con empresas autorizadas por la Secretaría y los residuos sean entregados a dichas empresas, la responsabilidad por las operaciones será de éstas independientemente de la responsabilidad que, en su caso, tenga quien los generó.

Quienes generen, reusen o reciclen residuos peligrosos, deberán hacerlo del conocimiento de la Secretaría en los términos previstos en el Reglamento de la presente Ley.

En las autorizaciones para el establecimiento de confinamientos de residuos peligrosos, sólo se incluirán los residuos que no puedan ser técnica y económicamente sujetos

de reuso, reciclamiento o destrucción térmica o físico química, y no se permitirá el confinamiento de residuos peligrosos en estado líquido.

Artículo 151 BIS.- Requiere autorización previa de la Secretaría:

I. La prestación de servicios a terceros que tenga por objeto la operación de sistemas para la recolección, almacenamiento, transporte, reuso, tratamiento, reciclaje, incineración y disposición final de residuos peligrosos;

II. La instalación y operación de sistemas para el tratamiento o disposición final de residuos peligrosos, o para su reciclaje cuando éste tenga por objeto la recuperación de energía, mediante su incineración, y

III. La instalación y operación, por parte del generador de residuos peligrosos, de sistemas para su reuso, reciclaje y disposición final, fuera de la instalación en donde se generaron dichos residuos.

Artículo 152.- La Secretaría promoverá programas tendientes a prevenir y reducir la generación de residuos peligrosos, así como a estimular su reuso y reciclaje.

En aquellos casos en que los residuos peligrosos puedan ser utilizados en un proceso distinto al que los generó, el Reglamento de la presente Ley y las normas oficiales mexicanas que se expidan, deberán establecer los mecanismos y procedimientos que hagan posible su manejo eficiente desde el punto de vista ambiental y económico.

Los residuos peligrosos que sean usados, tratados o reciclados en un proceso distinto al que los generó, dentro del mismo predio, serán sujetos a un control interno por parte de la empresa responsable, de acuerdo con las formalidades que establezca el Reglamento de la presente Ley.

En el caso de que los residuos señalados en el párrafo anterior, sean transportados a un predio distinto a aquél en el que se generaron, se estará a lo dispuesto en la normatividad aplicable al transporte terrestre de residuos peligrosos.

Artículo 152 BIS.- Cuando la generación, manejo o disposición final de materiales o residuos peligrosos, produzca contaminación del suelo, los responsables de dichas operaciones deberán llevar a cabo las acciones necesarias para recuperar y restablecer las condiciones del mismo, con el propósito de que éste pueda ser destinado a alguna de las actividades previstas en el programa de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que resulte aplicable, para el predio o zona respectiva.

Artículo 153.- La importación o exportación de materiales o residuos peligrosos se sujetará a las restricciones que establezca el Ejecutivo Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior. En todo caso deberán observarse las siguientes disposiciones:

I. Corresponderá a la Secretaría el control y la vigilancia ecológica de los materiales o residuos peligrosos importados o a exportarse, aplicando las medidas de seguridad que correspondan, sin perjuicio de lo que sobre este particular prevé la Ley Aduanera;

II. Únicamente podrá autorizarse la importación de materiales o residuos peligrosos para su tratamiento, reciclaje o reuso, cuando su utilización sea conforme a las leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones vigentes;

III. No podrá autorizarse la importación de materiales o residuos peligrosos cuyo único objeto sea su disposición final o simple depósito, almacenamiento o confinamiento en el territorio nacional o en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, o cuando su uso o fabricación no esté permitido en el país en que se hubiere elaborado;

IV. No podrá autorizarse el tránsito por territorio nacional de materiales peligrosos que no satisfagan las especificaciones de uso o consumo conforme a las que fueron elaborados, o cuya elaboración, uso o consumo se encuentren prohibidos o restringidos en el país al que estuvieren destinados; ni podrá autorizarse el tránsito de tales materiales o residuos peligrosos, cuando provengan del extranjero para ser destinados a un tercer país;

V. El otorgamiento de autorizaciones para la exportación de materiales o residuos peligrosos quedará sujeto a que exista consentimiento expreso del país receptor;

VI. Los materiales y residuos peligrosos generados en los procesos de producción, transformación, elaboración o reparación en los que se haya utilizado materia prima introducida al país bajo el régimen de importación temporal, inclusive los regulados en el artículo 85 de la Ley Aduanera, deberán ser retornados al país de procedencia dentro del plazo que para tal efecto determine la Secretaría;

VII. El otorgamiento de autorizaciones por parte de la Secretaría para la importación o exportación de materiales o residuos peligrosos quedará sujeto a que se garantice debidamente el cumplimiento de lo que establezca la presente Ley y las demás disposiciones aplicables, así como la reparación de los daños y perjuicios que pudieran causarse tanto en el territorio nacional como en el extranjero; y

Asimismo, la exportación de residuos peligrosos deberá negarse cuando se contemple su reimportación al territorio nacional: no exista consentimiento expreso del país receptor; el país de destino exija reciprocidad; o implique un incumplimiento de los compromisos asumidos por México en los Tratados y Convenciones Internacionales en la materia, y

VIII. En adición a lo que establezcan otras disposiciones aplicables, podrán revocarse las autorizaciones que se hubieren otorgado para la importación o exportación de materiales y residuos peligrosos, sin perjuicio de la imposición de la sanción o sanciones que corresponda, en los siguientes casos:

a) Cuando por causas supervenientes, se compruebe que los materiales o residuos peligrosos autorizados constituyen mayor riesgo para el equilibrio ecológico que el que se tuvo en cuenta para el otorgamiento de la autorización correspondiente;

b) Cuando la operación de importación o exportación no cumpla los requisitos fijados en la guía ecológica que expida la Secretaría;

c) Cuando los materiales o residuos peligrosos ya no posean los atributos o características conforme a los cuales fueron autorizados; y

d) Cuando se determine que la autorización fue transferida a una persona distinta a la que solicitó la autorización, o cuando la solicitud correspondiente contenga datos falsos, o presentados de manera que se oculte información necesaria para la correcta apreciación de la solicitud.

El Código Penal Federal Actual nos ilustra respecto a los delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, se ubican en el título vigésimo quinto, capítulo primero, de las actividades tecnológicas y peligrosas

ARTICULO 414.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.

La misma pena se aplicará a quien ilícitamente realice las conductas con las sustancias enunciadas en el párrafo anterior, o con sustancias agotadoras de la capa de ozono y cause un riesgo de daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente.

En el caso de que las actividades a que se refieren los párrafos anteriores, se lleven a cabo en un área natural protegida, la pena de prisión se incrementará hasta en tres años y la pena económica hasta en mil días multa, a excepción de las actividades realizadas con sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Cuando las conductas a las que se hace referencia en los párrafos primero y segundo de este artículo, se lleven a cabo en zonas urbanas con aceites gastados o sustancias agotadoras de la capa de ozono en cantidades que no excedan 200 litros, o con residuos considerados peligrosos por sus características biológico-infecciosas, se aplicará hasta la mitad de la pena prevista en este artículo, salvo que se

trate de conductas repetidas con cantidades menores a las señaladas cuando superen dicha cantidad.

Artículo 416.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente.

Cuando se trate de aguas que se encuentren depositadas, fluyan en o hacia una área natural protegida, la prisión se elevará hasta tres años más y la pena económica hasta mil días multa.

QUÉ SON LOS RESIDUOS O DESECHOS

La basura existe porque todos contribuimos a generarla, con absoluta falta de conciencia respecto de las consecuencias que ésta conducta ocasiona. Pensemos en que día a día, en cualquier ciudad del mundo, la basura es una montaña de materiales distintos. Todos los desechos se mezclan y al hacerlo se hacen inutilizables.

Las formas de inutilizar los materiales son: 1.- Porque ensuciamos las cosas; 2.- Porque revolvemos líquidos con sólidos; 3.- Porque no asignamos separar los lugares para depositar la materia orgánica de desecho de lo inorgánico.

Los sueños pueden convertirse en realidad si nos proponemos. Uno de estos sueños sería que no se generara más basura, independientemente de que se piense en resolver el problema de la basura ya existente.

Igualmente sería maravilloso, suponer que los servicios municipales de limpia y saneamiento, dejen de ser necesarios para destinar los recursos disponibles a otros propósitos de gobierno, como podría ser ejemplo, el transporte gratuito de los estudiantes, lo cual además evitaría a las madres, que llevan a sus pequeños a la escuela, estacionen hasta en triple fila los automóviles que usan para ese fin, y los berrinches de los demás conductores.

A que cosas les llamamos basura? De acuerdo con el diccionario Larrouse, basura significa inmundicia, polvo que se recoge barriendo, estiércol de las caballerías y en términos coloquiales todo desecho o desperdicio.

Con la basura, el mismo tiempo que empleamos en crearla, nos lleva el evitar crearla. Todos los minutos de nuestra vida, los consumimos con diversidad de productos empacados; estamos tan acostumbrados a utilizar los empaques de forma inadecuada. Nuestros alimentos, artículos de aseo, productos diversos, generan enormes cantidades de material que puede ser reusado, reutilizado y reciclado.

En nuestra legislación, conforme al artículo 115 Constitucional, el servicio de limpia corresponde a cada municipio. Uno de los servicios de limpia es la recolección de la basura, se presta en camiones especiales. La recolección de basura, a pesar que sabemos que es inadecuada, recibe todos los materiales mezclados e inutilizados y dá lugar a un problema como es el de los rellenos sanitarios cerrados o a cielo abierto.

Cada persona puede destinar un rincón de su espacio vital, sitio laboral o de esparcimiento, para acumular los productos de desecho debidamente seleccionados o separados y entregarlos o hacer que se recolecten por quienes si se dedican a reciclarlos nuevamente en centros de acopio.

Como ciudadanos podemos participar para que las funciones de los municipios resulten mas eficaces, debemos cooperar a que no se genere mas basura. Esta función debe enfocarse para controlar debidamente que se cumplan con el adecuado destino de los desperdicios. En el caso de los procesos industriales, resulta más fácil establecer los debidos controles, ya que sus residuos se comercializan o se reciclan; la industria metalmeccánica, por ejemplo, vende los trozos, pedazos o rebabas de los mencionados procesos de fabricación de piezas.

En los procesos industriales que generan residuos líquidos, debe concretizarse el almacenamiento en depósitos adecuados para el tratamiento de aceites gastados y substancias que puedan ser reciclados antes de su vertido. Los equipos para el tratamiento deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas.

Por otra parte el artículo 457 de la Ley General de Salud indica: Se sancionará con pena de uno a ocho años de prisión y multa por el equivalente de cien a dos mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, al que por cualquier medio contamine un cuerpo de agua superficial o subterráneo, cuyas aguas se destinen para uso o consumo humanos con riesgo para la salud de las personas.

Es pertinente aclarar que esta última parte debería eliminarse de la ley por redundante e innecesaria, puesto que cualquier contaminación de aguas para uso o consumo humanos, es un riesgo para la salud.

Con motivo de la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de Diciembre de 1996, se adicionaron los artículos 203 y 204 de esta Ley como se transcriben:

"Art. 203.- Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable.

El término para demandar la responsabilidad ambiental, será de cinco años contados a partir del momento en que se produzca el acto, hecho u omisión correspondiente."

En efecto, este precepto establece la responsabilidad por el daño ambiental consistente solamente en reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable; como se ve, nos remite a la legislación civil, específicamente en el Código Civil del Distrito Federal, al Capítulo V, relativo a las obligaciones que nacen de los actos ilícitos, que comprende los siguientes artículos:

"Art. 1910.- El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo...".

Se trata de un hecho ilícito y por lo mismo un hecho generador de obligaciones. Como sabemos, en el hecho ilícito concurren una o mas voluntades, con las calificativas de dolo y de culpa o negligencia. Aunque no es éste el momento de desarrollar la teoría del hecho ilícito, conviene a este

propósito, diferenciar el ilícito civil del ilícito penal, considerando que en el primero se pretende el resarcimiento del daño y en el segundo se busca la disminución del delito a través de la represión con la sanción penal.

Igualmente, importa señalar que en materia civil, el que el ilícito sea cometido con dolo lleva implícita la intención de causar ese daño, por lo que la consecuencia será solo reparar tal daño. Sin embargo, por lo que se refiere al ilícito cometido con culpa o negligencia, equivalente a descuido, falta de cuidado e im previsión, la inobservancia del deber de cuidado, se sanciona mas levemente, aún cuando se puede ocasionar una serie o cadena de daños, como es el caso de los daños al medio ambiente que incluyen los daños a los recursos naturales y a la biodiversidad, daños que, además de ser incalculables, jamás pueden ser resarcidos en su totalidad.

Por otra parte en materia civil se establece la responsabilidad objetiva, independientemente del dolo o la culpa implícitas, como reza el precepto siguiente:

“Art. 1913.- Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosos por si mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a reponder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente.”

Remontémonos a los orígenes de la responsabilidad civil objetiva, es decir, aquella que surgió a principios del siglo pasado, con el advenimiento de la revolución industrial (o desarrollo del maquinismo), época en la cual se determinó que existe responsabilidad para el dueño, dado que éste obtiene ganancias o utilidades en la operación de las máquinas o sustancias, por lo tanto, cuando con el uso de ellas, se cause daño, en razón de la peligrosidad, explosividad, corrosividad, etc., se consideró que se producen daños sin culpa; posteriormente se transformó la responsabilidad sin culpa por la del riesgo creado.

“Art. 1914.- Cuando sin el empleo de mecanismos, instrumentos, etc., a que se refiere el artículo anterior y sin culpa o negligencia de ninguna de las partes se producen

daños, cada una de ellas los soportará sin derecho a indemnización”.

“Art. 1915.- La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios.”

Como puede verse de los artículos antes transcritos, se establecen los siguientes supuestos: 1) que el sujeto (titular del interés jurídico) es una persona física o moral; 2) que la reparación del daño puede consistir en el restablecimiento de la situación anterior (indemnización: in = sin y demni = daño) o en el pago de los daños (menoscabo, pérdida o deterioro) y perjuicios (la utilidad que produce o ganancia lícita que puede obtenerse de un bien).

Con referencia a la primera situación, es evidente la posición liberal-individualista característica de la legislación civil vigente; el interés jurídico es individual y se atribuye a la persona en relación con sus bienes; por ello, para efectos de responsabilidad por daño, se tiene en cuenta solo a la persona, en su integridad y sus bienes corpóreos e incorpóreos.

En una posición primera, opuesta a la anterior, tratándose del medio ambiente, la contaminación que afecta los recursos naturales y de la biodiversidad, está referida a intereses de la colectividad o de una comunidad, por tanto, se trata de intereses difusos o colectivos no tutelados y sin portador o titular reconocidos en el Código Civil Mexicano. En síntesis, puede decirse que si la ley civil no contempla la tutela de los intereses colectivos o difusos a que se refiere el artículo 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, no será posible hacer efectiva esa responsabilidad consistente en reparación del daño o de no ser posible el pago mediante un equivalente en numerario.

Es evidente la necesidad urgente del reconocimiento de los intereses colectivos o difusos, a través de una normatividad que posibilite la actuación y la legitimación de los portadores o titulares, para reclamar en la vía jurisdiccional, cualquier transgresión a esos intereses colectivos o difusos.

En la segunda situación, tampoco resulta aplicable la legislación civil, respecto de la reparación del daño

causado, porque puede efectuarse, a elección del ofendido, mediante el restablecimiento de la situación anterior o indemnización o el pago de daños y perjuicios. Tratándose de los daños ambientales, en la mayoría de las ocasiones resulta difícil, si no es que imposible, el restablecimiento de la situación anterior, para ello debe atenderse a la cuantificación de la magnitud del deterioro o de la contaminación. En cuanto a la naturaleza, ésta ha requerido de miles y a veces de millones de años para constituirse y en cambio la destrucción de los recursos naturales puede ser paulatina o instantánea. Los daños al medio ambiente generalmente son incalculables, a lo único que se puede aspirar es a restaurar en parte ese daño.

La reparación del daño a que se refiere el artículo 1915 del Código Civil, se refiere a dos tipos de daños, resarcibles cuando afectan a un interés patrimonial individual y no resarcibles cuando afectan la vida humana, en el primer caso, puede restablecerse la situación anterior al evento dañoso y en el segundo caso, como la vida no retoña, cabe el pago por equivalencia, que puede consistir en dinero o en bienes de valor similar, cuyo monto se calcula en el valor asignado, con base en los supuestos de la Ley Federal del Trabajo. En materia ambiental, es evidente que la naturaleza afectada, podrá, según sea el caso, admitir un resarcimiento parcial aunque sabemos de antemano que todo el dinero del mundo no alcanzaría para reparar ese daño.

De ahí la necesidad urgente de lo que debe legislarse para establecer graduaciones en relación a la magnitud del daño, la reparación que corresponda a cada caso, según corresponda a alteración, deterioro, contaminación o afectación, resolviendo que en problemas ambientales no cabe elección alguna a cargo del ofendido, solo la ejecución de la estimación judicial de restablecimiento de la situación anterior al daño o el pago por equivalencia.

Eduardo A. Pigretti¹, señala que las reglas clásicas de responsabilidad, contenidas en la legislación civil de los países, no brindan en la actualidad suficiente protección a quienes resultan víctimas de daños ambientales.

En conclusión, resulta conveniente hacer algunas precisiones: es inaplicable la legislación civil, por ambigua, ya que establece la alternativa de reparación del daño, mediante el restablecimiento o el pago de daños y perjuicios, que no

corresponde, conforme al artículo 203 de la LGEEPA, donde solamente cabe la opción de reparar los daños mediante el pago por equivalencia de los mismos, además de no existir posibilidad alguna de aplicación de la legislación civil en la forma que actualmente se encuentra estructurada.

El artículo 152 Bis de la LGEEPA, en lo relativo a daños por manejo o disposición de materiales o residuos peligrosos, establece la responsabilidad de recuperar y restablecer las condiciones del suelo, como única posibilidad de reparación del daño ambiental.

A nivel local, algunas de las conductas que atentan contra el medio ambiente, generan residuos sólidos y deben sancionarse severamente, como por ejemplo: la persona que sea sorprendida al tirar todo tipo de envases, empaques y contenedores de bebidas en la acera, la calle, parques y jardines. La sanción podrá consistir en el pago del equivalente al costo del servicio de limpia y en caso de insolvencia del infractor, la condena a la prestación de servicios a la comunidad, en los fines de semana y por determinado número de horas.

Igualmente deberá sancionarse a la persona que por cualquier medio arroje materias, objetos o líquidos en cursos de agua, depósitos o cuerpos de agua que se infiltren a los mantos acuíferos de modo que alteren su estado natural y la condena a la persona responsable será la reparación de los daños causados y en caso de persona insolvente, a prestar servicios a la comunidad.

Los comportamientos contrarios al deber de conservación de los elementos naturales, no nos permiten gozar y disfrutar de la naturaleza en su estado original. Se dice que el hombre es el mas grande depredador, me atravesaría a afirmar que no sabe vivir. El respeto a la naturaleza no es algo que otro deba hacer, vivimos el momento con la idea de que quien nos suceda tendrá que hacerlo, sin embargo éste es el mundo que dejaremos a nuestros hijos, quienes no se merecen un entorno deteriorado.

La sustentabilidad consiste en que podemos servirnos de los elementos naturales en la medida de satisfacer nuestras necesidades, cuidar a la vez de los mismos en beneficio de las generaciones futuras.

Entre las formas de evitar de manera absoluta la generación de basura de cualquier tipo que pueda constituirse en residuos sólidos o líquidos, están:

- 1.- Usar bolsas de plástico solamente para empaque de sólidos ya que con los líquidos se ensuciarán y no podrán reciclarse.
- 2.- Emplear contenedores o botes rígidos para el material orgánico y líquidos destinados a hacer la composta, mismos que una vez desocupados, podrán limpiarse para el siguiente uso.
- 3.- Reducir y aplanar todo material de cartón de empaque, cajas y botes para apilarlos al tamaño transportable a un centro de acopio.
- 4.- Apilar uniformemente las hojas de papel impreso, periódico, revistas, publicidad y etiquetas para su reciclado.
- 5.- Aplastar y apilar de modo que ocupen mínimo espacio los objetos tales como latas y tapas de metal que admiten reciclado.
- 6.- Separar las aguas negras de las aguas grises ya que estas últimas pueden reusarse para riego de jardines y descarga de baños.
- 7.- Eliminar la costumbre de entregar al barrendero o al carro recolector de su barrio la basura mezclada.
- 8.- Adoptar como forma de vida el que todos los miembros de la familia colaboren para seleccionar los materiales que deben reutilizarse y reusarse.
- 9.- Adoptar el uso mínimo del agua y evitar todo desperdicio.
- 10.- Evitar que los desechos orgánicos domésticos se destinen a confinamientos a cielo abierto o cerrados, porque los plásticos tardarán quinientos años en degradarse, los lixiviados producto de la descomposición de estos materiales se infiltran y contaminan los mantos acuíferos, y se facilita la reproducción de fauna nociva y la proliferación de todo tipo de bacterias.

El agua permite que nuestro planeta tierra sea habitable, por tanto, es absolutamente necesario que procuremos retroceder o restaurar los ecosistemas para contar con agua limpia, evitando echar basura en los cuerpos de agua, es decir conservarlos en el estado natural en que se encontraban originalmente.

Por ningún motivo se deben hacer vertidos que alteren el estado natural de los cuerpos de agua, no solo porque se acaba la vida de los seres animales y vegetales que ahí se encuentran e igualmente requieren del agua para desarrollarse.

No tenemos derecho alguno para considerarnos dueños de la naturaleza, somos parte de ella, donde hasta el ser mas

pequeño tiene derecho a su habitat, al respetarse esta situación se garantiza la supervivencia de todo ser vivo.

En los procesos productivos sólo deben considerarse como residuos los materiales, que en su última etapa ya no pueden ser reciclados, reusados y reutilizados; éstos son los que deberán tener una disposición final adecuada.

Tenemos la responsabilidad de hacer algo por nuestro hermoso planeta tierra.

CASUÍSTICA EN RESIDUOS DOMÉSTICOS Y TÓXICOS

La República Mexicana tiene al menos 432 sitios contaminados con residuos peligrosos y tóxicos, Hidalgo y Guanajuato, los mayores generadores, según se desprende de una evaluación que realizó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) entregara información parcial a un solicitante².

La generación creciente de basura urbana e industrial evidencia la falta de una política oficial y del sector privado para reducir la generación de dichos residuos. Las llamadas "empresas limpias" son la excepción en el país, como confirman los reportes oficiales. Continúa así el derroche de recursos, en especial naturales, vía la basura, además de que otras políticas, como la de separación de los desechos, el reciclaje y la reutilización de buena parte de lo que tiramos, brillan por su ausencia. Ejemplifica lo anterior la ciudad de México, donde la legislación para separar la basura según el material de que se trate es letra muerta por falta de infraestructura en el sistema de recolección y la poca información que sobre la materia tiene la ciudadanía³.

En Querétaro existen 11 empresas que utilizan askareles (bifenilos policlorados, BPC), sustancias de lenta degradación altamente dañinas para la salud y el ambiente, pero se desconoce su uso final, reveló la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) María de Jesús Ibarra Silva, la información fue proporcionada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual no reveló el nombre de las compañías ni el destino de los desechos, cuyo uso está prohibido en varios países⁴.

La construcción de un confinamiento en Zimapán, Hidalgo, fue autorizada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y por los gobiernos del Estado y municipal en 2004. Ese año Befesa -que en España ha sido acusada de contaminar el río Tinto- firmó con el ejido el contrato de renta de 133 hectáreas por 10 mil pesos mensuales. Los habitantes, agregó Lozano, "estábamos contentos, porque nos habían dicho que sería una planta recicladora de basura y que se iban a crear al menos mil 500 empleos, pero al comienzo de este año descubrimos que aquí se depositarán residuos altamente tóxicos"⁵.

En Zimapán, Hidalgo el movimiento Todos somos Zimapán ha denunciado que el proyecto de confinamiento de residuos tóxicos, cuya construcción no se ha detenido y que según los planes de la empresa española Befesa empezará a funcionar antes de concluir este mes, contaminará el río Moctezuma, situado a un kilómetro del confinamiento, dañará irreversiblemente el manantial de Saja, conocido como el Infiernillo, y que forma parte del proyecto Acueducto II, con el que se surtirá de agua potable a los habitantes de Querétaro y anoche, elementos de la policía municipal y del Estado de Hidalgo que se habían concentrado en la cabecera de Zimapán, agredieron a integrantes del movimiento opositor al confinamiento de residuos peligrosos⁶. Entrevistado antes de comparecer ante el Ministerio Público, el diputado local mexiquense Germán Rufino Contreras Velázquez denunció que al igual que él "otras 44 personas fuimos encarcelados ilegalmente y sometidos a ultraje y atropellos por el Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo por el único delito de pretender ejercer derechos constitucionales como es una protesta contra la obra que pretende llevar a cabo la empresa española Sistemas para el Desarrollo Sustentable"⁷.

En Zimapán, como en los caso de Sonora y Coahuila, una de las irregularidades consiste en la distancia que hay entre el confinamiento y las poblaciones, misma que la ley fija en, por lo menos, 25 kilómetros. En el caso que nos ocupa, es apenas de seis. Pero además, y como expresaron los inconformes en la visita-protesta que realizaron a la ciudad de México el martes pasado, el confinamiento estaría sobre una corriente de agua intermitente, algo prohibido en la legislación ambiental. Aquí se pondría en peligro el abastecimiento de agua para la zona y regiones vecinas. Esto, cuando en Zimapán la minería ya afecta con arsénico los mantos freáticos. Sin embargo, cabe recordar otros confinamientos igualmente "sustentables" que las instancias oficiales apoyaron mientras la ciudadanía era la última en enterarse de los verdaderos alcances e implicaciones que traerían, especialmente en cuanto a la salud pública y los recursos naturales. Es lo que sucedió con el de La Víbora, en Sonora (a unos cuantos kilómetros de Hermosillo), el de La Pedrera en el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, y el de General Cepeda, en Coahuila. Al final, debido a la oposición ciudadana y de las organizaciones ecologistas, fueron clausurados y mostraron los resabios de un sistema que

privilegia la inversión privada y, de paso, alienta la corrupción⁸.

En Morelos, con base en información de otros municipios del mismo estado, las empresas contratadas comenzaron a prestar el servicio como antes lo hacían las autoridades públicas, pero que al cabo de unos meses instauraron, por sus pistolas, el cobro por número de bolsas; si esto es cierto, quiere decir que en Cuernavaca ocurrirá lo mismo, y la gente se preguntará si a cambio de esos pagos serán devueltos los impuestos especiales que se cobran por los servicios municipales, uno de éstos precisamente relacionado con la basura⁹.

En un rincón del corredor indígena de Morelos llamado Cerro de Milpilla, ubicado a un kilómetro de la zona arqueológica de Xochicalco, pobladores apremian a funcionarios a revertir perjuicios provocados por tiradero a cielo abierto, señalan que el basurero ha causado muertes, malformaciones y enfermedades como cáncer, critican tortuguismo ante denuncia presentada hace 5 meses. Hace más de 30 años los municipios de Cuernavaca, Xochitepec, Jiutepec, Zacatepec y Temixco han depositado residuos sólidos en un tiradero a cielo abierto, sin cumplir con las leyes correspondientes. Esa acumulación de basura se extendió en el área selvática, provocando la muerte de fauna local, así como la emigración de algunas especies y la degradación ambiental¹⁰.

En Tultitlán, México, hace 29 años fueron sepultadas 75 mil toneladas de cromo hexavalente, elemento altamente contaminante y corrosivo¹¹.

Al menos 10 por ciento de las mil 700 toneladas de basura que se producen diariamente en Ecatepec son depositadas en tiraderos a cielo abierto sin autorización. Destacó que los dueños de los camiones recolectores de basura llevan los desechos a tiraderos clandestinos para evitar el pago de la cuota en el basurero municipal¹².

Las autoridades municipales de Ecatepec han dado prioridad a recolectores concesionados, al menos 350 empleados del área de servicios públicos se encuentran "inutilizados" por esta situación¹³. A partir de que el ayuntamiento concesionó el vertedero a la empresa Asiamex hace más de dos años, ésta ha impuesto cuotas diferenciadas a organizaciones por depositar desechos. El cabildo reconoce a 5 organizaciones y ofrece

mediar para que bajen cuotas en basurero, las cuotas por camión recolector oscilan entre 15 y 250 pesos, dependiendo de la organización a la que pertenezcan¹⁴.

Concesionarios incumplen las normas de protección ambiental, en noviembre de 2005 un derrame de lixiviados contaminó al menos 10 hectáreas de cultivos de los ejidos de Santa María Chiconautla y Totolcingo, Estado de México; sin embargo, esa vez, a pesar de la denuncia penal que interpusieron los ejidatarios afectados, las autoridades no tomaron alguna medida. El ayuntamiento de Ecatepec expuso que además se ha detectado que el basurero de Chiconautla recibe residuos no sólo de Ecatepec sino de Huixquilucan, Puebla, y Cuernavaca, Morelos, además del ingreso de residuos industriales como recorte de mezclilla y alfombra, cuando sólo debería aceptar desechos domésticos¹⁵.

Seis hectáreas del tiradero al aire libre del pueblo de Santiago Yacuitlalpan, Estado de México tiene acumuladas al menos 20 mil toneladas de basura, lo que ha obligado a utilizar químicos para inhibir plagas y malos olores en la zona. Indicó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente amenazó con aplicar una multa de 400 millones de pesos a la alcaldía si no saneaba el sitio este año. A principios de 2007 se llegaron a concentrar hasta 130 mil toneladas de basura en la parte baja del cerro de Santiago Yacuitlalpan¹⁶.

Presionado por integrantes de cinco núcleos ejidales y habitantes de barrios, el ayuntamiento solicitó al gobierno del Estado de México suspenda la construcción del relleno sanitario de San Nicolás Apaxco, en la comunidad de San Luis Ayucan. Los inconformes exigen que especialistas confirmen la viabilidad del proyecto, ubicado en una cabecera hidrológica, pues no descartan que el vertedero pueda contaminar manantiales, cuatro criaderos de truchas y el agua que consume la región¹⁷.

La Procuraduría de Protección del Medio Ambiente del estado de México clausuró un basurero ilegal, de 200 metros cuadrados, en el barrio de San Sebastián, informó Miguel Angel Contreras Nieto, titular de la dependencia. Ese mismo sitio fue utilizado por el gobierno municipal para depositar los desechos de la localidad, pero cuando cerró nunca efectuó el saneamiento y siguió operando en forma irregular¹⁸.

En la zona metropolitana del valle de México se producen más de 21 mil 500 toneladas de basura al día, lo cual representa 34 por ciento del total del país; además, 47 por ciento de la basura generada en el Distrito Federal está formada por residuos orgánicos no reciclables, que en su mayoría provienen de la basura domiciliaria. Por otra parte existe una recolección de residuos mezclados, lo cual disminuye su valor en un rango de 25 a 75 por ciento para el aprovechamiento en las plantas de separación. Gustavo Alanís, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, expuso que la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, emitida por la pasada Asamblea Legislativa del Distrito Federal, "es letra muerta, pues nadie la cumple, nadie la aplica", por lo que propuso efectuar los cambios que se necesiten para que la legislación se haga valer¹⁹.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el relleno sanitario del Bordo Poniente mantiene la disposición de que en agosto del próximo año será cerrado en forma definitiva para evitar daños a la infraestructura del drenaje del oriente del Valle de México, señaló la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El organismo federal agregó que el fallo de la Corte establece que el Bordo Poniente corresponde a terrenos que forman parte de la zona federal de Texcoco y no son propiedad del Estado de México, ni del Distrito Federal, sino que su administración está bajo su responsabilidad²⁰.

Empresarios de Jalisco aportarán 25% del costo total del proyecto de recolección de basura, representa un banquete para grandes empresas dedicadas al negocio de la basura, pues los paquetes de licitación saldrán por regiones, no por municipios, lo que obligará a los participantes a una inversión multimillonaria para crear vertederos, así como contar con la logística y los vehículos necesarios. A cambio podrán cobrar por las 6 mil 500 toneladas que se generan diariamente en la entidad y producir biogás con esa materia prima o materiales para revender²¹.

Unos 60 habitantes del Barrio San Mateo retuvieron durante seis horas a Fernando Peláez, propietario de la empresa Tequsa, en protesta porque en forma ilegal pretendía sepultar en la comunidad tambos con 38 mil litros de mercaptano (líquido tóxico) y derramó al menos 2 mil. La maniobra quedó al descubierto cuando fueron derramados 2 mil litros de esa sustancia, lo que ocasionó un fuerte olor que alarmó a los

vecinos. Este martes decidieron retener al empresario, para exigir a las autoridades el retiro de un contenedor y tambos con 38 mil litros de mercaptano²².

Al menos 90 contenedores con productos tóxicos fueron abandonados en el camino rural que conduce a los cerros de Huatepec y Tepezingo, en las inmediaciones del poblado de San Salvador Atenco, Estado de México. Esta es la segunda ocasión, en menos de un mes, que desconocidos arrojan contenedores y garrafones con diversas sustancias químicas y tóxicas en el municipio²³.

El Congreso local inició una investigación contra el senador panista Ernesto Saro Boardman, debido a que en 2005, cuando era alcalde de Ramos Arizpe, autorizó la construcción de un confinamiento de residuos peligrosos en el ejido San Andrés a la empresa Tecnologías Ambientales Especializadas, pero ésta sólo pagó 2 por ciento de los derechos a cambio de obtener los permisos municipales permitió que los empresarios Enrique Osuna Westrup, Andrés Oyervidez Ramírez, Lidia y José Luis Martínez Díaz, propietarios de dichas tierras y socios de la compañía, pagaran sólo 100 mil pesos por una serie de trámites por los que en realidad debieron haber pagado 5 millones 740 mil pesos²⁴.

La empresa Asarco obtuvo autorización de Texas para operar cinco años; por sus procedimientos de refinación de metales ha emitido centenares de toneladas de plomo y de arsénico desde que inició operaciones en 1887, a la orilla del río Bravo, a menos de dos kilómetros de El Paso y de Juárez. Por ello, consideró que la decisión en riesgo la salud de los ciudadanos de esta región²⁵.

NOTAS

¹ Pigretti, Eduardo A., Derecho Ambiental, Ed. Depalma, Argentina, 2000, p. 4.

² Elizabeth Velasco, Existen 432 sitios contaminados con residuos tóxicos en el país: Semarnat, Diario La Jornada martes 20 de marzo de 2007.

³ Iván Restrepo, Sin infraestructura ni leyes que se cumplan, Diario La Jornada lunes 24 de diciembre de 2007.

⁴ Mariana Chávez Corresponsal, Se usan askareles en 11 empresas de Querétaro, Diario La Jornada lunes 30 de abril de 2007.

⁵ Matilde Pérez U., Autoridades de Hidalgo impiden protesta contra basurero de tóxicos, Diario La Jornada lunes 15 de octubre de 2007.

⁶ Balacean a opositores de un confinamiento de residuos, Diario La Jornada lunes 3 de diciembre de 2007.

⁷ Gustavo Castillo, Denuncia penal contra Osorio Chong, por la represión en Zimapán, Diario La Jornada sábado 8 de diciembre de 2007.

⁸ Iván Restrepo, Zimapán rechaza confinar desechos tóxicos, Diario La Jornada lunes 19 de noviembre de 2007.

⁹ Octavio Rodríguez Araujo, La basura en Morelos, Diario La Jornada jueves 17 de mayo de 2007.

¹⁰ Mariana Norandi, Ninguna autoridad actúa contra daños ambientales en Alpuyecá, Diario La Jornada martes 20 de marzo de 2007.

¹¹ Silvia Chávez González, corresponsal, Sanearán en Tultitlán tierras contaminadas con cromo, Diario La Jornada viernes 30 de noviembre de 2007.

¹² Javier Salinas Cesareo, Exigen frenar depósito de basura en tiraderos clandestinos de Ecatepec, Diario La Jornada lunes 18 de junio de 2007.

¹³ Javier Salinas Cesareo, corresponsal, Desplazan a basureros sindicalizados en Ecatepec, Diario La Jornada viernes 23 de noviembre de 2007.

¹⁴ Javier Salinas Cesareo (Corresponsal), Burreros de Ecatepec se manifiestan 7 horas, Diario La Jornada martes 16 de octubre de 2007.

¹⁵ Javier Salinas Cesareo, Pide el cabildo de Ecatepec clausura temporal del tiradero de Chiconautla, Diario La Jornada miércoles 25 de julio de 2007.

¹⁶ Silvia Chávez González, corresponsal, Sanearán antes de 2008 sitio de tiradero en Huixquilucan, Diario La Jornada martes 23 de octubre de 2007.

¹⁷ Silvia Chávez González, Solicitan suspender construcción de un relleno en Edomex, Diario La Jornada miércoles 13 de junio de 2007.

¹⁸ Silvia Chávez González, Clausuran basurero ilegal en Teoloyucan, Edomex, Diario La Jornada domingo 27 de mayo de 2007.

¹⁹ Bertha Teresa Ramírez, Alista el GDF propuesta para procesar desechos sólidos, Diario La Jornada jueves 13 de septiembre de 2007.

²⁰ En 2008 cierra el Bordo Poniente, Diario La Jornada viernes 19 de octubre de 2007.

²¹ Juan Carlos G. Partida (Corresponsal), Privatizarán recolección de basura en Jalisco, Diario La Jornada miércoles 5 de septiembre de 2007.

²² Silvia Chávez González, Protestan en Edomex por derrame de dos mil litros de tóxicos, Diario La Jornada miércoles 22 de agosto de 2007.

²³ Javier Salinas Cesareo, Encuentran 90 tambos con sustancias tóxicas cerca de San Salvador Atenco, Diario La Jornada sábado 18 de agosto de 2007.

²⁴ Leopoldo Ramos (Corresponsal), Indagan anomalías en concesión de basurero, Diario La Jornada viernes 31 de agosto de 2007.

²⁵ Rubén Villalpando Corresponsal, Crearán un frente contra la reapertura de Asarco, Diario La Jornada viernes 4 de mayo de 2007.